



Asamblea General

Distr. general
31 de agosto de 2010

Español solamente

Consejo de Derechos Humanos

15º período de sesiones

Tema 4 del programa

**Situaciones de derechos humanos que requieren
la atención del Consejo**

Exposición escrita conjunta* presentada por American Association of Jurists (AAJ), International Association of Democratic Lawyers (IADL), France Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas especiales, y Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), organización no gubernamental reconocida en la Lista

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[17 de agosto de 2010]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido recibida de la organización no gubernamental.

Violación del derecho a la libertad de expresión y criminalización de la protesta en Puerto Rico

I. Trasfondo

Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, que no ha propiciado su descolonización y plena aplicación de la Resolución 1514 (XV).¹ A pesar de tener un sistema de Derecho propio, sufre la imposición de la legislación y jurisprudencia estadounidenses, lo que afecta todos los aspectos de la vida puertorriqueña. Esto se agravó cuando el gobernador Fortuño del Partido Nuevo Progresista (PNP) resultó electo en 2008. De inmediato eliminó servicios a los sectores más necesitados.²

El 20 de mayo de 2010 se realizaron protestas en la Universidad de Puerto Rico, en contra de los aumentos de matrícula, despidos de empleados y eliminación de servicios. Cuando algunos manifestantes trataron de llevar agua y comida a los estudiantes, la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT)- Fuerza de Choque de la Policía, los golpeó sin provocación previa.³

El 24 de junio, el Presidente del Senado instruyó a los guardias dentro del Capitolio (casa de las leyes) a que desalojara al público y a los periodistas. Este acto de intimidación, bajo amenaza de arresto y daño físico, fue repudiado por la opinión pública.

Durante casi una semana no se permitió acceso al Capitolio aunque se estaba discutiendo legislación de interés público, lo que añadió al descontento de meses.⁴ El 30 de junio, la Seguridad del Capitolio y la UOT desalojaron a la prensa del vestíbulo mediante fuerza excesiva. Por instrucciones del Superintendente de la Policía, la UOT y la Policía Montada agredieron a todo el que se encontraba reunido de forma legítima dentro y fuera del Capitolio.

Contrario a la legislación local y federal,⁵ la Policía cometió varias violaciones: no tenía visible su identificación, lanzó indiscriminadamente gases lacrimógenos desde un helicóptero contra ancianos, mujeres y niños; y, uno de los oficiales desenfundó su arma y disparó contra personas desarmadas.

II. Fundamentos

La Carta de la ONU, obligatoria para los Miembros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Estados Unidos, las obligaciones en la Declaración Universal y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, contienen principios sobre los cuales se fundan los sistemas regionales e internacionales.

¹ Decisión, Comité de Descolonización, 17 junio 2010.

² El gobierno ha desmantelado las procuradurías, entre éstas, de los impedidos, contrario al Convenio sobre los derechos de las personas con impedimento, 30 julio 2009, firmado por EE. UU.

³ Cynthia López, et al., El Nuevo Día, "Policías custodian portones de la UPR", 14 mayo 2010. Luis Torres, padre de un estudiante, fue golpeado por llevarle comida a su hijo.

⁴ Aprobaron la Ley 161 que delega poderes de fiscalización a particulares, lo que sería inconstitucional. Se criminalizó la protesta con "Obstrucción o Paralización de Obras", art. 210, Código Penal de PR (2004).

⁵ La legislación federal prohíbe abusos de poder "so color de autoridad" ("Deprivation of Rights Under Color of Law"). La Ley de la Policía de PR tiene el deber ministerial de proteger los derechos civiles, 25 LPRA § 3102.

Los derechos a la libre determinación, expresión, asociación y el debido proceso, al igual que la promoción y el respeto de los derechos humanos son normas perentorias, garantizadas por estos instrumentos y organismos.

Estos derechos también están contenidos en las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Los Tribunales Supremos de ambas jurisdicciones han prohibido que se interfiera con la difusión de información, evaluando las actuaciones de los gobiernos mediante un escrutinio estricto, presumiendo su inconstitucionalidad.⁶

El derecho de los ciudadanos a fiscalizar cómo se conducen los asuntos del gobierno, sujeto a las contadas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública, está firmemente establecido. En estas instancias ni aplican los privilegios ni se justifica el uso de la fuerza excesiva, además de constituir censura previa.⁷

El Gobierno de Puerto Rico intenta imponer de nuevo⁸ los estados de excepción criminalizando la protesta social. Si bien se utilizan para casos extremos de disturbios, los estados de excepción no pueden imponerse para restringir derechos no derogables.⁹

Varios legisladores y el Superintendente calificaron a los que abusaron de su poder de “héroes”.¹⁰ El Superintendente viola su propia reglamentación y las normas internacionales sobre la conducta policíaca: el Código de Conducta para los Oficiales del Orden Público¹¹ y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y las Armas por los Oficiales del Orden Público.¹²

Estas conductas vulneran las protecciones que establecen la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para Víctimas del Crimen y el Abuso de Poder,¹³ y, la Resolución sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Víctimas de Crímenes y del Abuso de Poder¹⁴.

III. Solicitamos

1. Al Consejo de Derechos Humanos (CDH), según su mandato,¹⁵ que evalúe las violaciones expuestas considerando la falta de representación internacional de Puerto Rico por su condición colonial.
2. Al CDH refiera este caso al Relator Especial encargado de la cuestión de la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.¹⁶

⁶ NY Times v. US, 403 US 713 (1971); Asoc. de Medicina v. Romero, 2002 TSPR 80.

⁷ “Gobierno obstaculiza el acceso a la información pública”, 9 julio 2010, Centro de Periodismo Investigativo, <http://www.cpipr.org>

⁸ El gobierno del PNP convocó en 1993 las fuerzas militares bajo la justificación de “emergencia nacional”. “Programa de Gobierno del PNP, 1993-1996”, pág. 146, en “Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados”, 61 Rev. Jur. Col. Abo., Núm. 4, 16-40 (2000).

⁹ Corte Europea (caso Lawles) y Corte Interamericana (OC-8/87), basándose en la Convención Americana, PIDCP y Principios de Siracusa.

¹⁰ Si el Superintendente exoneró públicamente a los policías las víctimas no tendrían oportunidad de reclamar ante un organismo imparcial, al tener que presentar una querrela ante éste para iniciar el proceso. Es inútil apelar a los tribunales porque el gobierno aumentará el número de jueces a su favor. Entrevista, Pres. Col. Abog., Arturo Hernández, Radio Isla 1320, 23 julio 2010.

¹¹ G.A. Res. 34/169

¹² UN Doc. E/AC.57/DEC/11/119

¹³ G.A. Res. 40/34

¹⁴ UN Doc./CONF. 144/28, I.C. 27 (1990)

¹⁵ A/RES/60/251

3. Refiera al Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos,¹⁷ y exija respeto a favor de los observadores del Colegio de Abogados y demás defensores en Puerto Rico.
4. Exija a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos que procesen a los que cometieron abusos de poder.
5. Al Representante Especial del Secretario General sobre el asunto de los Derechos Humanos investigue e informe al CDH de sus hallazgos, y al Centro de Derechos Humanos.
6. Exija que la Policía de Puerto Rico y a las autoridades de EE. UU. -que colaboran en diferentes iniciativas- sean instruidas sobre el respeto a los derechos humanos.
7. Se designe una comisión investigadora *in situ*, o mantenga en observación la situación de Puerto Rico, u otro mecanismo que en Derecho proceda.¹⁸

¹⁶ CDH Res. 1993/45

¹⁷ Resolución A/HRC/RES/13/L.24; G.A. Res. 53/144

¹⁸ Se ha utilizado el Procedimiento 1503.